

Espacios y tiempos de la democracia en América Latina

Marcos Roitman Rosenmann

1. Introducción



Quizás lo único democrático existente en América Latina sea la violencia.

Violencia que es asumida como parte esencial de las relaciones sociales, invirtiendo el orden sobre el cual se asienta la legitimidad del poder político. No se trata de una situación de inestabilidad permanente o de ingobernabilidad. Por el contrario, la violencia es el principio regulador de la acción política contingente. Las clases dominantes optan por un proyecto de dominación, negando cualquier posibilidad de uso alternativo y control social del poder. La democracia, reconvertida en violencia estructural y fuente de organización de la sociedad, es aceptada como regla de juego en la cual están inmersas las verdaderas posibilidades de una construcción democrática.

Las luchas por la democracia en América Latina son parte de opciones políticas enfrentadas a esta violencia estructural. Sin embargo, el espacio tiempo sobre el cual se asienta, confunde el sentido de las reivindicaciones, transformando su significado en un acto de violencia, subversión y destabilización político-social.

Demandar justicia social, erradicación de la pobreza, políticas fiscales progresivas, salud pública, educación o derechos étnicos de autodeterminación de los pueblos indios, se considera fuente de violencia. Acabar con dichas propuestas se vuelve factor clave para lograr la gobernabilidad política. Puesto el mundo al revés, es el ejercicio de la violencia democratizada lo que se refuerza desde el poder de las clases dominantes, su objetivo es una descalificación de las reivindicaciones democráticas de la sociedad civil.

La democracia eliminada del campo de condiciones del ejercicio del poder, queda subsumida a ser opción marginal defendida por quienes no son reconocidos como miembros participativos en el proceso de toma de decisiones. La democracia se transforma en hegemonía del pueblo y lucha anti-sistémica, se reivindica de manera violenta ante la inexistencia de espacio de disenso del conflicto social.

He querido llamar la atención hacia esta relación existente entre democracia y ejercicio del poder en América Latina, para proponer, a continuación, un vínculo entre política y liberación en América Latina, capaz de explicar los momentos en los cuales la lucha por la democracia ha trans-

formado al pueblo en sujeto activo, rompiendo su condición de espectador destinatario de políticas excluyentes y autoritarias, hayan sido éstas formuladas por regímenes dictatoriales, oligárquicos o desarrollistas. Es decir, cuando el pueblo se reconoce a partir de sus luchas reivindicativas, abriendo el espacio de lo político hacia un horizonte democrático donde «la libertad de expresión y crítica, propia de la democracia, no extingue el conflicto y es a su vez una forma de control político. Sin embargo, dentro de la historia, dentro de la situación necesaria en que lo general es particular, en que los fines generales del hombre se muestran en grupos particulares y pueden conducir al dogmatismo, la intolerancia y la justificación..., la democracia es la forma de control más justa y humana al reconocer los grupos particulares que integran la sociedad»¹.

Bajo esta premisa, es posible plantear que los momentos democráticos de construcción del poder en América Latina son simultáneos a los procesos formativos de identidad nacional y lucha antiimperialista. Con la finalidad de hacer evidente la premisa enunciada dividiré la argumentación en etapas que, a mi juicio, se constituyen en acontecimientos históricos que sobrepasan la especificidad de la coyuntura política nacional donde se producen, transformándose en puntos de inflexión que contextualizan regionalmente las diferentes formas que han adoptado las luchas por la democracia y la liberación en América Latina en estos últimos cuarenta años. Cuba en 1959, Chile en 1970, Nicaragua en 1979 y México-Chiapas 1994. Todos ellos momentos de lucha por la democracia y la liberación en América Latina que tienen diferentes puntos de partida pero comparten un mismo objetivo: la reivindicación de espacios democráticos en los contenidos del ejercicio del poder político.

2. El campo de lo político en América Latina: 1930-1960



Si algo es evidente antes de la Segunda Guerra Mundial en América Latina, es la inexistencia generalizada de formas democráticas de ejercicio y control del poder político. Las dictaduras oligárquicas y las dinastías familiares serían las formas más «acabadas» de estabilidad y dominación². El asesinato, la exclu-

sión y marginación constituyen los rasgos más destacados de la época³.

Si la revolución mexicana fue una temprana lucha democrática en América Latina (1910), su experiencia caminó en solitario hasta muy entrado el siglo xx. Los intentos de transformación social, liberación nacional y apertura democrática, terminaron, inexorablemente, con el surgimiento de más dictaduras y mejores técnicas represivas⁴. Las reformas de carácter social que impulsaron los gobiernos de Batlle Ordóñez en Uruguay, Irigoyen en Argentina o aquellos intentos más populistas, como los representados en las experiencias provenientes de la revolución juliana en Ecuador y Alessandri en Chile, se contrarrestaron rápidamente. Igual fin tendrán las primeras experiencias insurreccionales de contenido revolucionario: Brasil 1927 (Prestes), El Salvador 1932 (Farabundo Martí) y Chile 1932 (Marmaduke Grove) derrotadas bajo el manto de un nacionalismo «patrio» y de un discurso anticomunista⁵.

Poder oligárquico y cuadillismo militar sin democracia son las formas más habituales que encontramos en la época como ejercicio del poder. Carlos Ibáñez del Campo en Chile (1927-1931), Maximiliano Hernández en El Salvador (1931-1944), Jorge Ubico en Guatemala (1931-1944), Machado en Cuba (1925-1933), Tiburcio Cárrias en Honduras (1933-1948), Anastasio Somoza García en Nicaragua (1937-1956) Gobiernos provisionales de carácter militar en Paraguay, Luis Sánchez Cerro (1931-1933 y Oscar Benavides (1933-1938) en Perú, Rafael Trujillo en República Dominicana (1930-1962), Gabriel Terra (1933-1938) y Alfredo Baldomir (1938-1943) en Uruguay, Juan Vicente Gómez (1909-1932) en Venezuela, José Félix Uriburu (1930-1932) y Agustín P. Justo (1932-1938) en Argentina, juntas militares en Bolivia, David Toro y Germán Busch (1936-1939), militarización del poder en Brasil (Estado Novo) y Alberto Enríquez en Ecuador (1937-1938). Dictaduras que compartirán el rasgo de ser producto de la dominación oligárquica fundada sobre criterios plutocráticos, paternalistas y de clientelismo político. Fue, lo que cínicamente se denominó, el «Cesarismo democrático»⁶.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los intentos por democratizar la política y hacer surgir una sociedad civil participativa y fuerte avalada por la derrota militar del nazi-fascismo no será bien recibida por las clases dominantes latinoamericanas que si bien apoyaron a los países alia-

dos contra el Eje, no tenían intención de democratizar sus formas de dominación política.

La hegemonía de los Estados Unidos en el recién creado «mundo libre» ejerce toda su fuerza a partir de un nuevo tipo de enfrentamiento que hace estéril la lucha contra las tiranías oligárquicas en América Latina: la guerra mundial contra el comunismo. *Naciente enemigo político cuyo triunfo, se dirá, provoca la desintegración de la sociedad y la anulación de las libertades del hombre. Nuevo enemigo, cuyas formas de penetración en la sociedad, presupone la transformación del escenario de guerra, haciendo de ésta una lucha global entre dos mundos antagonicos. Antagonismo que culmina en la división maniquea «mundo libre» y «mundo comunista». (Obsérvese que la división propuesta no señala mundo democrático, sino mundo libre). División en bloques que obliga a establecer un liderazgo para luchar eficazmente contra el comunismo internacional. Liderazgo apropiado por los Estados Unidos y del cual obtendrán excelentes beneficios económicos.*

Una guerra que para los Estados Unidos representa: «un negocio (un gran negocio en efecto) que ha sido incorporado al sistema social (y al aparato económico), y es natural que la noción de enemigo y de la amenaza interna también existan como un ingrediente psicológico necesario. Aún más, la calidad misma del “carácter nacional” es fuertemente influido por esta condición al punto de que, por requerimientos de la estructura social misma, para el estadounidense promedio “cualquiera puede ser mi enemigo en cualquier momento”... durante la Segunda Guerra Mundial, Japón era nuestro enemigo, ahora es nuestro amigo; la URSS era nuestro amigo, ahora es nuestro enemigo, Alemania era nuestro enemigo, ahora parte de ella es nuestro amigo... Durante la Segunda Guerra, China era nuestro amigo, ahora es nuestro enemigo, Italia era enemigo ahora es nuestro amigo, Yugoslavia era amigo, ahora un día es nuestro enemigo y otro nuestro amigo..., y así sucesivamente..., estas fuertes fluctuaciones en la definición de amigo y enemigo producen cinismo y un estar dispuesto a dejar que los de arriba, los expertos, nos digan quién es el amigo y quién el enemigo; el carácter se acostumbra a esos cambios, como quien cambia de corbata»⁷.

Si durante un breve tiempo se alberga la ilusión democrática como una forma posible de articulación del poder político en la región, las distintas formas de intervención militar extranjera apoyada en la violencia estructural, terminan por alejarla

del horizonte histórico de la dominación política de las burguesías locales en América Latina. El autoritarismo y las dictaduras renacen bajo nuevos signos⁸. La acción política de las fuerzas armadas está destinada a justificar sus intervenciones bajo el manto rector del enemigo interno. Libertad vs comunismo⁹. La democracia no representa una opción viable para el ejercicio y control del poder. Su uso se permite si previamente se restringe su desarrollo a una ley que la defiende y protege de sus enemigos.

Las luchas reivindicativas por transformar y quebrar el poder de las oligarquías (procesos de reformas agrarias, reconocimiento sindical, etc.), son contempladas como acciones de desestabilización, merecedoras de persecución y castigo¹⁰. Esta política de enemigo interno se complementó con el desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional. Doctrina que favorece y legitima la firma de acuerdos entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos para crear un protectorado que evite un posible ascenso del comunismo. La firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el año 1947 (TIAR) con los Estados Unidos, es el primer paso de la guerra fría en América Latina. El CONDECA, en Centroamérica, creado en 1964 será su correlato¹¹.

Gobiernos nacionalistas y reformadores que buscan la ejecución de políticas democratizadoras son las víctimas propicias para poner en práctica esta racionalidad del enemigo interno. El primer síntoma llega con el derrocamiento de Rómulo Gallegos en Venezuela (1948) y el surgimiento de la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Golpe de Estado que abre las puertas para enarbolar la defensa de la libertad como argumento para justificar la intervención. Manuel Odría en Perú (1950), Gustavo Rojas Pinilla en Colombia (1953), Alfredo Stroesner en Paraguay (1954) y Carlos Castillo Armas en Guatemala (1954), sin olvidar Costa Rica en 1948. En todas ellas el anti-comunismo es el denominador común¹². En este contexto de guerra fría y autoritarismo, surge en Cuba, a mediados de los años cincuenta, un movimiento de liberación nacional cuyo enfrentamiento a la dictadura de Fulgencio Batista, culmina en 1959 con el triunfo de la insurgencia democrática¹³. El éxito político y militar del movimiento 26 de julio transforma el pensamiento y la acción política en América Latina.

La revolución cubana abre una etapa en la cual el campo de fuerzas de lo político incorpora a su consideración los siguientes elementos: 1) La op-

ción insurreccional como un camino viable para realizar el cambio social democrático; 2) La redefinición de tácticas y estrategias para la toma o el mantenimiento del poder al interior de los partidos políticos en América Latina; 3) Apertura de un debate sobre las expectativas de la revolución en el pensamiento crítico y del desarrollo de nuevas formas de creación intelectual; 4) Alteraciones en los comportamientos políticos de las clases dominantes latinoamericanas y; 5) Transformaciones en la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina.

3. De la vía insurreccional al triunfo electoral de la Unidad Popular. América Latina entre 1959-1970



a insurrección popular en Cuba, fue el punto de partida para acelerar el «advenimiento» de una sociedad democrática, negada por la acción dictatorial de continuos gobiernos militares u oligárquicos que se inscriben históricamente en la llamada república neocolonial. Fue la acción insurreccional la que abrió las puertas para el establecimiento posterior de un orden político liberador cuya fuente de legitimación se fundamentó en el concepto de guerra justa contra la tiranía: «Nosotros llamamos pueblo si de lucha se trata, a los seiscientos mil cubanos que están sin trabajo deseando ganarse el pan honradamente sin tener que emigrar de su patria por falta de sustento; a los quinientos mil obreros del campo que habitan los bohíos miserables, que trabajan cuatro meses al año y el resto pasan hambre compartiendo con sus hijos la miseria..., a los cuatrocientos mil obreros cuyos retiros están desfalcados..., a los cien mil agricultores pequeños que viven y mueren trabajando una tierra que no es suya..., a los profesionales jóvenes: médicos, ingenieros, abogados, veterinarios, pintores, escultores, ... que salen de las aulas con sus títulos deseosos de lucha y llenos de esperanza para encontrarse en un callejón sin salida... ¡Ese es el pueblo, el que sufre todas las desdichas y es por tanto capaz de pelear con todo el coraje! A ese pueblo, cuyos caminos de angustia están empedrados de

engaños y falsas promesas no le íbamos a decir “te vamos a dar”, sino: “¡Aquí tienes, lucha ahora con todas tus fuerzas para que sea tuya la libertad y la felicidad»¹⁴.

Fue este llamado a la recuperación de la dignidad e integridad del hombre, rescatando el valor ético de la política en la acción de guerra justa contra el dictador, lo que permitió el surgimiento de movimientos insurreccionales que asumieron el camino emprendido por el movimiento guerrillero 26 de julio en Cuba. Su triunfo supone la aportación de tres referentes teóricos resultado de la experiencia insurreccional: «1.º Las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el ejército; 2.º No siempre hay que esperar a que se den todas las condiciones para la revolución; el foco insurreccional puede crearlas; 3.º En la América subdesarrollada el terreno de la lucha armada debe ser fundamentalmente el campo»¹⁵.

Si el aporte en la definición de una estrategia militar es uno de sus aspectos destacados, no lo es menos la concepción del hombre que define el proyecto socialista en Cuba: «... donde no se trata de cuántos kilogramos de carne se come o de cuántas veces por año pueda ir alguien a pasearse en la playa, ni de cuántas bellezas que vienen del exterior puedan comprarse con los salarios actuales. Se trata precisamente, de que el individuo se sienta más pleno, con mucha más riqueza interior y con mucha más responsabilidad. El individuo de nuestro país sabe que la época gloriosa que le toca vivir es de sacrificio; conoce el sacrificio. Los primeros lo conocieron en la Sierra Maestra y dondequiera que se luchó; después lo hemos conocido en toda Cuba. Cuba es la vanguardia de América y debe hacer sacrificios porque ocupa un lugar de avanzada, porque indica a las masas de América Latina el camino de la libertad plena»¹⁶.

Son de estas dos premisas, guerra de guerrillas y concepción del hombre nuevo, de donde surgen las diferencias entre la izquierda tradicional, representada por la acción militante de los partidos comunistas y socialistas, y las nuevas organizaciones guerrilleras. La primera busca no perder su credibilidad en el interior del movimiento obrero, sobre todo en aquellos países donde tiene una larga e histórica implantación (Chile, México, Uruguay, Argentina o Brasil y en menor medida, Venezuela o Perú)¹⁷. Para mantener su hegemonía incorpora en sus discursos y escritos la experiencia cubana como un ejemplo de lucha por la liberación nacional, pero rechaza cualquier parangón que conlleve reconocer la vía insurreccional como

como una estrategia posible de lucha por el poder en América Latina ¹⁸.

Las divergencias entre ambas concepciones del accionar político culminan con el distanciamiento, desconfianza y aislamiento de los movimientos insurreccionales. Separados y con escasos canales de comunicación, la experiencia política cubana no pasa a enriquecer la propuesta teórica de los partidos obreros comunistas o socialistas. Esta incapacidad teórica para asimilar y producir conocimiento a partir de la riqueza que suponía la experiencia cubana, se hace notar en la discusión interna del pensamiento crítico latinoamericano. Un ejemplo lo constituye el debate sobre modos de producción. Debate que buscó determinar mecánicamente cuál era el tipo de relación social que definía a las sociedades de América Latina, para a partir de ello lograr identificar la etapa histórica de transición en la cual se hallaban inmersas ¹⁹.

Si se reconocía la preponderancia del feudalismo en las formas de dominación y de explotación, el cambio social debía tomar un carácter capitalista por sucesión de etapas. Si por el contrario, se acentuaba el sentido capitalista de las relaciones sociales de producción, había que emprender de manera inmediata la transición al socialismo. Esta discusión cuyo apego a los textos fue mayor que a la realidad latinoamericana, desconoció la experiencia cubana y prefirió quedarse con los «Grundrisse». Esta discusión, hoy casi olvidada, fue un punto de inflexión en el pensamiento crítico que se reflejó en diferentes opciones políticas de transformación social ²⁰.

Fueron de las alternativas diseñadas para abordar el cambio social y de una crisis política y económica que evidenció los límites de las propuestas de un desarrollo de «puertas adentro», de donde surgieron las organizaciones político-militares de la llamada nueva izquierda en América Latina ²¹. La crítica que realizarán para fundamentar sus propuestas la desplegarán en dos frentes: a) el foco no resulta ser el embrión de un proceso expansivo del ejército guerrillero (el asesinato de Ernesto Che Guevara en Bolivia era la evidencia); b) la vanguardia debe ser político militar y por tanto creadora de frentes de masas en todos los sectores y clases sociales subalternas. La nueva vanguardia debe reconocer ambos elementos, el político y el militar, para ser el partido de la revolución. Sólo de esta forma se logra orientar la lucha por la liberación nacional, agudizar las contradicciones de clase y preparar la insurrección. Esta interpretación, que hoy consideramos de un esquematismo reduccio-

nista, no es ajena al momento cultural y político que se vivía, donde la revolución formaba parte del horizonte histórico del futuro inmediato. Por eso, en esta línea surgen organizaciones como el MIR en Chile, ELN en Bolivia, ERP en Argentina, MLN/Tupamaros en Uruguay, ELN en Colombia, ALN en Brasil o FIR en Perú ²².

Los procesos de descolonización en Asia y África (Argelia, India, Vietnam), se constituyen a mediados de los años sesenta en una experiencia que unida a la de América Latina dan como resultado el surgimiento de una propuesta geopolítica. África, una parte de Asia y América Latina pasan a formar el «Tercer Mundo». El surgimiento del bloque de países no alineados, y la propuesta de acción conjunta contra el imperialismo, promueve una movilización colectiva que podemos sintetizar en el llamado a «crear un, dos, tres Vietnam». La tricontinental, es la expresión completa de esta visión de los procesos de liberación política y de lucha armada cuya influencia mundial se unifica en las experiencias de Cuba, Argelia, China y Vietnam ²³.

La imagen que recorre el mundo mostrando los tanques de la URSS en las calles de Praga es el símbolo final de un ciclo histórico en las luchas por la democracia y la liberación en América Latina. Las críticas a los partidos comunistas, la división en el campo socialista, la polémica chino-soviética, el levantamiento del muro de Berlín, son factores que suman desaliento y diluyen esperanzas de un posible cambio revolucionario. La matanza de Tlateloleo en México, Puerto Montt en Chile, Córdoba en Argentina, y el aumento de la violencia política en toda la región son demostración de una crisis que tomará caminos distintos en América Latina.

A los planteamientos triunfalistas le siguen los pesimistas. La vía insurreccional se diluye y queda huérfana de apoyo político-social. La acción militar, la represión, el asesinato político, el exilio y los golpes de Estado son la respuesta más común de las clases dominantes latinoamericanas. La experiencia cubana, no sólo sirvió para generar un debate en la izquierda y el pensamiento crítico latinoamericano; sino también para dar lugar a una acción política de las burguesías y élites dominantes a nivel continental. Se buscará el aislamiento de Cuba a fin de eliminar su realidad del horizonte histórico continental.

El triunfo de la revolución cubana se constituye en un factor añadido a la maniquea división geopolítica: mundo libre vrs comunismo. Si Cuba for-

ma parte de América Latina y la región cae en el campo de los intereses hegemónicos de los Estados Unidos, el diseño de su estrategia busca evitar el riesgo de surgimiento de una segunda Cuba. Estados Unidos propone una estrategia para la modernización social y económica que sirva para maquillar los rasgos más visibles de la pobreza rural y urbana ²⁴. Las burguesías y las elites empresariales se dieron a la tarea de buscar un reacomodo interno impulsando reformas en el agro y ampliando, en algunos casos, los espacios de negociación política. Cuando ello no fue posible, o se desbordó la participación generando un mayor nivel de conflicto social, no dudaron en recurrir a la violencia militar y a la protección de los Estados Unidos para salvaguardar el orden.

Las dos estrategias se combinaron. La apertura se identificó con el impulso de gobiernos que plantearon una «revolución en libertad» como contrapartida a la Revolución «totalitaria y comunista» en Cuba. El gobierno de la democracia cristiana en Chile 1964-1970, con Eduardo Frei como máximo líder, es el símbolo continental de este proyecto. Su crisis, tras el breve período de la Unidad Popular, es una continuación de los golpes militares que ya habían iniciado su andadura en 1964. Brasil, Argentina, López Arellano en Honduras, Ovando en Bolivia o Arturo Molina en El Salvador. La invasión en República Dominicana y la acción de Bahía Cochinos en Cuba son constatación directa de los argumentos expuestos.

Con la aplicación deliberada y sistemática de esta política, comienza el bloqueo a Cuba que se mantiene inexorablemente hasta hoy, aceptando los gobiernos latinoamericanos sumisamente su expulsión de la OEA a petición de los Estados Unidos. Las clases dominantes latinoamericanas tendrán bien aprendida la lección. La revolución cubana debe ser irrepetible: sus anticuerpos fueron rápidamente creados.

El rol de subordinación que asignó Estados Unidos a la región en el mundo internacional fue inversamente proporcional al grado de intervención en el proceso de toma de decisiones y diseño de las políticas anticomunistas en el área. Es esta dimensión la que une los intereses de los Estados Unidos con los objetivos de dominación omnimoda presente en las burguesías y oligarquías militares de América Latina ²⁵. El esquema del enemigo interno facilitó la militarización de las sociedades e hizo funcional la intervención de las fuerzas armadas a la hora de determinar los límites permisibles para la realización de reformas. Así no hubo

espacio para un ejercicio democrático del poder político. La militarización de la política sin necesidad de ejercer los militares formalmente el poder, es el signo que acompaña hasta hoy el quehacer de la política en América Latina. La violencia estructural impone esta necesidad ante la falta de espacios democráticos de participación, mediación y negociación. El conflicto social no asume su forma democrática y por tanto la política tampoco.

4. De la Unidad Popular en Chile a la experiencia del FSLN en Nicaragua (1970-1990)



Si la revolución cubana marca el rumbo de la política en América Latina en la década de los sesenta, la siguiente década quedó definida por el desarrollo de los acontecimientos que sucederían en Chile, tras el triunfo electoral de Salvador Allende y la Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970. Por primera vez en la política de América Latina, una coalición electoral, hegemonizada por partidos populares y marxistas, logra acceder al ejecutivo e imponer a su candidato presidencial doctor Salvador Allende.

El proyecto político y democrático de la Unidad Popular está vivamente expresado en su diferente composición ideológica: cristianos por el socialismo, radicales, laicos, independientes, marxistas, comunistas, socialistas, socialdemócratas y socialcristianos. Pluralidad que abrió la política a sectores hasta ese momento ajenos a los mecanismos de participación colectiva. La democracia se extendió al conjunto del pueblo redefiniendo los espacios del juego político y la propia sociedad civil: pobladores urbanos, profesionales autónomos, técnicos, pequeños empresarios y comerciantes, mujeres, juventud, campesinos, estudiantes, pueblos y comunidades indígenas y trabajadores independientes. Fue esta heterogeneidad de donde nació la fuerza y la virtud democrática del proyecto político de la Unidad Popular.

Si la revolución cubana mantuvo el debate sobre la transición en los límites de la insurrección como guerra justa frente al tirano y la opresión oligárquico-militar, el triunfo de la Unidad Popular

deriva la discusión hacia una vertiente inédita: la vía pacífica al socialismo: «Chile es hoy la primera nación de la tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista...: pisamos un camino nuevo; marchamos sin guía por un terreno desconocido, apenas teniendo como brújula nuestra fidelidad al humanismo de todas las épocas —particularmente el humanismo marxista— y teniendo como norte el proyecto de sociedad que deseamos, inspirada en los anhelos más hondamente enraizados en el pueblo chileno»²⁶.

El triunfo de la vía pacífica al socialismo rompe el predominio de lo estrictamente militar en la discusión y reduce el protagonismo de las fuerzas armadas a un sometimiento constitucional que las subordina al poder civil.

Si hasta ese momento teorizar sobre la función subordinada de las fuerzas armadas a la política no era viable, fue consecuencia directa de la realidad que impedía un análisis tan osado. No es casual que la vía insurreccional haya dominado todo el pensamiento político de la izquierda hasta ese momento. Entre otros motivos porque las reformas impulsadas por gobiernos civiles y democráticos salidos de las urnas habían culminado en sendos golpes de Estado y los intentos que habían desarrollado políticas de democratización también provenían de manos militares. Ejemplo de lo señalado son los generales Lázaro Cárdenas, Omar Torrijos, Velasco Alvarado o Juan Domingo Perón. En estas circunstancias parecería ser que la gravitación de las fuerzas armadas en la política de reformas y contrarreformas indicaba cuáles eran los límites permitidos y quiénes sus impulsores²⁷.

Este péndulo militar, roto con el triunfo de la Unidad Popular, inaugura un ciclo de reformas estructurales, redimensionando los valores sociales, económicos y culturales de la democracia política. Su interpretación como desarrollo político y compromiso étnico-moral busca dar respuesta eficaz a las demandas de las mayorías sociales que habían sido excluidas y marginadas de los beneficios de dos décadas continuadas de crecimiento económico. Democracia y desarrollo dejan de ser, por primera vez, reclamos electoralistas para transformarse en política de actuación y compromiso social: «Atender a las reivindicaciones populares es la única forma de contribuir de hecho a la solución de los grandes problemas humanos; porque ningún valor universal merece ese nombre si no es reductible a lo nacional, a lo regional y hasta

a las condiciones locales de existencia de cada familia. Nuestro ideario podría parecer demasiado sencillo... Pero el pueblo necesita abrigar sus familias en casas decentes, con un mínimo de facilidades higiénicas, educar a sus hijos en escuelas que no hayan sido hechas sólo para pobres, comer lo suficiente en cada día del año, el pueblo necesita trabajo, amparo en la enfermedad y en la vejez, respeto a su personalidad. Eso es lo que aspiramos dar en un plazo previsible a todos los chilenos. Lo que ha sido negado a América Latina a lo largo de siglos»²⁸.

La vía chilena se transforma en un referente para el conjunto de los países latinoamericanos. *De su desarrollo se hace depender, en gran medida, la demostración de que socialismo y democracia son parte consustancial de un solo proceso y que son las condiciones de violencia estructural provenientes de la dominación política oligárquica, lo que niega la democracia. Si la violencia estructural desaparece del horizonte histórico de ejercicio del poder, ello indicará que sus causas son atacadas. Es decir, las estructuras de desigualdad y pobreza, injusticia social, explotación, colonialismo interno y opresión étnica son transformadas por estructuras democráticas de liberación política. «Si la violencia interna o externa, en cualquiera de sus formas —física, económica, social o política—, llegara a amenazar nuestro normal desarrollo y las conquistas de los trabajadores, correrían el más serio peligro la continuidad institucional, el Estado de Derecho, las libertades políticas y el pluralismo. El combate por la emancipación social o por la libre determinación de nuestro pueblo adoptaría obligatoriamente manifestaciones distintas de lo que con legítimo orgullo y realismo histórico, denominamos la vía chilena al socialismo»²⁹. La ampliación de las libertades políticas, sociales y el desarrollo de la lucha institucional³⁰ como parte de la estrategia de transición pacífica hacia el socialismo, genera grandes esperanzas de cambio en los países de la región.*

Sus propuestas saltan las fronteras continentales para incidir en el desarrollo político de los partidos comunistas y socialdemócratas de Europa occidental. En el primer caso con la formulación de las políticas de compromiso histórico y de eurocomunismo. Veamos: «La propuesta de “compromiso histórico”, adelantada por Berlinguer, no entre el partido comunista y la democracia cristiana (como ahora) como muchos se encarnizaron en decir, sino entre los comunistas, los socialistas y las fuerzas populares de inspiración católica

(que es algo diferente), deriva de la reflexión sobre la experiencia de Chile»³¹. «La estrategia eurocomunista se propone realizar una convergencia con los partidos socialistas y socialdemócratas, con las fuerzas cristianas progresistas, con todos los grupos democráticos no enfeudados a la propiedad de tipo monopolista»³².

Si el «eurocomunismo» y la política de compromiso histórico fue el resultado de la valoración de la experiencia chilena, por parte de los partidos comunistas de España, Italia, Portugal y Francia³³, los partidos socialdemócratas y socialistas interpretan su desarrollo como opción para producir un nuevo pacto social capaz de democratizar el Estado y el poder.

«La vía democrática, única posible. Las posibilidades de conquistar el poder del Estado desde fuera han desaparecido prácticamente en el Occidente desarrollado. Por el contrario, han crecido notablemente las posibilidades de conquistar ese poder basándonos en la acción democratizadora dentro del Estado... La vía democrática posibilita este salto cualitativo sin necesidad de que el proletariado necesite establecer, como condición previa, su iniciativa en el terreno de la violencia»³⁴.

Más allá de las instrumentalizaciones de la experiencia chilena por parte de los partidos y la izquierda europea, América Latina siguió viendo en la Unidad Popular una opción posible de cambio social y lucha antiimperialista. El respeto al orden constitucional, el impulso del juego político, la apertura de espacios de negociación y mediación institucional, reforzó el apoyo de las organizaciones políticas y sindicales. El APRA en Perú, AD en Venezuela, PLN en Costa Rica, PRI en México, PRD en Panamá, Partido Febrerista en Paraguay y el conjunto de organizaciones populares y políticas de la izquierda latinoamericana, mostraron su compromiso con la Unidad Popular. La vía chilena fue una construcción diferente de la política y de lucha por la liberación nacional y dependencia exterior. Proceso global que comienza donde los gobiernos populistas no habían podido o querido romper su compromiso con las viejas oligarquías terratenientes y las estructuras de poder caciquil. Es decir en la 1) Nacionalización completa de las riquezas básicas y reforma agraria; 2) Socialización de la economía en función de las áreas social, mixta y privada; 3) Transformación de las estructuras de la desigualdad y articulación de la democracia social, política y económica.

Las cartas estaban sobre la mesa. Las reglas del

juego quedaron sometidas a los comportamientos políticos de la Unidad Popular y de la oposición Demócrata Cristiana y del Partido Nacional. Si el gobierno lograba profundizar las reformas y ampliar su base social de apoyo, la legitimidad crecería, haciendo cada vez más viable el proceso democrático. Si esto sucedía y la respuesta de la clase dominante y sus organizaciones políticas y sociales decidían emprender una acción de desestabilización anticonstitucional, lo que quedaría reflejado sería la facilidad con que renunciaban a la defensa de los valores democráticos, cuando no podían hacer un uso instrumental de los mismos. Ambos factores se entrecruzan de tal forma que culminan en el golpe de Estado que derrocó al gobierno legítimo de la Unidad Popular el 11 de septiembre de 1973³⁵.

Así, lo que comenzó siendo una ventana abierta por donde entró el aire de cambio y de las transformaciones democráticas en la sociedad chilena, se fue cerrando para dar paso a la estrategia golpista. Estrategia plagada de actos que se iniciaron el mismo momento de triunfo electoral en 1970. El asesinato del general René Schneider, el llamado a la descapitalización y el boicót económico, la fuga de divisas, las huelgas de empresarios, camioneros, el mercado negro, los atentados, las acusaciones constitucionales contra ministros, el llamado a la desobediencia civil fueron el caldo de cultivo para inducir a los militares a una acción golpista contra el gobierno democrático de Salvador Allende. La propia democracia cristiana verá esfumarse su estrategia de derrotar electoralmente a la UP en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. La impotencia política de no lograr los dos tercios del parlamento, mayoría necesaria para realizar la moción de censura al ejecutivo, provoca que el responsable de las negociaciones con la Unidad Popular de la democracia cristiana, Patricio Alwyn, propusiera romper las conversaciones y pasar a apoyar directamente la acción golpista³⁶. Opción que se concreta el 22 de agosto de 1973, cuando el parlamento decide declarar ilegítimo el gobierno y arenga a las fuerzas armadas a tomar el poder. Así lo reflejará Salvador Allende en su discurso de respuesta:

«En las últimas elecciones parlamentarias sectores opositores trataron de obtener los dos tercios de los senadores para acusar al presidente. No lograron suficiente respaldo para ello. Por eso pretenden mediante un simple acuerdo producir los mismos efectos de la acusación constitucional... El inmérito acuerdo aprobado no tiene vali-

dez jurídica alguna para el fin perseguido ni vincula a nadie. Pero contiene el símbolo de la renuncia por parte de algunos sectores a los valores cívicos más esenciales de nuestra democracia. En el día de ayer los diputados de la oposición han exhortado formalmente a las fuerzas armadas y carabineros a que adopten una posición beligerante frente al poder ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinadas por mandato de la Carta Fundamental, que asuman una función política según las opiniones inconstitucionales de la mayoría de una de las ramas del congreso»³⁷.

La vía chilena al socialismo se cerró con un triste balance. El presidente Salvador Allende asesinado y miles de chilenos exiliados, muertos, presos o desaparecidos. La democracia no formaba parte de la acción política de las burguesías latinoamericanas, la chilena no podía ser una excepción.

La experiencia chilena permite a las clases dominantes de América Latina tomar en consideración los riesgos que supone el mantenimiento de un Estado de Derecho que deja la puerta abierta a un uso alternativo del poder, más allá de lo permisible para regular el cálculo racional del capital y el capitalismo como sistema de explotación y dominio. Por vez primera se percatan en los hechos, de las diferencias sustantivas que surgen cuando el orden constitucional permite una interpretación que amplía el principio de aplicar la Ley en beneficio de las grandes mayorías sociales. Mayorías no contempladas en los hechos para formar parte de la sociedad política y del proceso de toma de decisiones. De esta manera su renuncia al orden constitucional fue una renuncia explícita a la democracia, desapareciendo por completo del horizonte histórico de la dominación burguesa en América Latina. El orden social propuesto, tras el abandono de la democracia, por las clases dominantes y sus élites transnacionalizadas tiene una primera urgencia: crear un nuevo ordenamiento jurídico-constitucional, que evite lo sucedido en Chile. Reorganización que cumple las mismas funciones asignadas a las reformas liberales del siglo XIX en América Latina. Reformas que garantizaron de manera efectiva un orden político, oligárquico, violento, excluyente y represivo. Refundación que marca la diferencia con los anteriores golpes de Estado ocurridos hasta 1973.

La ola de intervenciones militares en el Cono Sur que emulan el modelo chileno y se sumaron a

las dictaduras oligárquico-militares centroamericanas, generalizan una época de redefinición acerca del rol del Estado, la acción política y el orden económico. Golpes de Estado que definen lo político como un campo de fuerzas «despolitizado», rechazando la acción mediadora de los partidos políticos como forma de articulación de la sociedad civil³⁸. Considerando las acciones colectivas como destabilizadoras del orden en tanto afectan el sentido racional que contempla el proceso de toma de decisiones. Proceso que no puede quedar sometido a una evaluación ideológica. La política tiene vigencia en tanto sus efectos son ponderables, pero pierde su centralidad y con ello su importancia dentro del proceso de toma de decisiones. La política puede seguir existiendo, pero siendo parte de un teatro que no afecta la racionalidad efectiva de la decisión tomada. La fuerza con que surgen estos proyectos refundacionales de la política, con o sin dictaduras militares, a mediados de los años setenta, provoca una fuerte crisis en la izquierda y una fractura en el pensamiento crítico latinoamericano³⁹.

La caída de la Unidad Popular en Chile se vive como derrota de la vía pacífica al socialismo y como el fracaso en la propuesta de una transformación radical de las estructuras de la desigualdad. El socialismo se aleja de las preocupaciones de una parte del pensamiento latinoamericano, quedando fuera de su horizonte histórico. El problema se plantea pragmáticamente: salir de las dictaduras para recuperar las libertades individuales (derechos de reunión, asociación y expresión). Libertades individuales que eliminan la lucha por la democracia social, política y económica. Así, la experiencia de la Unidad Popular se invierte para señalar que la izquierda «tradicional» no supo valorar la democracia, instrumentalizando su uso en la medida que sus ejecutores proceden del campo del marxismo, del leninismo, el comunismo o socialismo revolucionario, por ello incapaces por definición para entender de los principios democráticos.

El potenciar la lucha por las libertades, abandonando la lucha por la democracia, busca descalificar, a partir de esta separación, a quienes desde posiciones críticas, marxistas o no, se dice, son incapaces de valorar una gobernabilidad en libertad y progreso. Así: «Dicha reformulación supone entre otras cosas: la adecuada combinación de las dimensiones clase y nación, de modo que todos los intereses y valores que pueden ser asumidos en ese proyecto, lo sean íntegra y efectivamente, y no

a modo de pretexto o alianza espúrea; la adecuada combinación entre intereses sociales y populares sustantivos que un orden económico de tendencia igualitaria debe preservar, y las reglas de un juego político cuya valoración debe reposar sobre criterios ético-políticos y no sólo instrumentales. En este sentido la historia del país muestra que la adhesión puramente instrumental a la democracia, como espacio que permite la satisfacción de intereses competitivos, le da a un régimen político un carácter necesariamente precario»⁴⁰. En esta misma dirección: «La democracia era aceptada como lo dado, definida como necesidad histórica, no sólo por la objetividad de las limitaciones de la clase obrera para construir una alternativa, sino también porque proporcionaba un ámbito de negociación y porque permitía el acceso a ciertas “cuotas de poder”. Aunque no lo vivía ideológicamente como su mundo, la izquierda estaba allí tanto porque se le imponía como lo existente, como porque establecía con ese orden una relación instrumental»⁴¹.

Sus mentores, quienes siguen declamándose del socialismo, lo dejan reducido en su definición a un conjunto indiferenciado de libertades individuales garantes de ciudadanos con derecho al acceso a los bienes de mercado, transformando el poder democrático en un acto de gobernabilidad, es decir, cambiando el sentido de la democracia: control social del poder por la administración del poder mismo. El resultado obtenido es el surgimiento del «modo de producción democrático»⁴². Esta novedosa forma de construir el socialismo «light» o de dicta desde su negación, explica la crisis de la generación de marxistas del 68. Generación de hombres quebrados humanamente y frustrados políticamente que se rearticulan nuevamente a partir del rechazo, primero de los países del este y luego del marxismo en la década de los ochenta.

El triunfo de una nueva revolución que no figuraba en la agenda: Nicaragua cambiará en el último año de la década de los setenta el devenir político de la región. El éxito de un levantamiento popular de carácter insurreccional y el desarrollo de la lucha armada para combatir a una de las dictaduras oligárquico-militares más antigua de la región (los Somoza), recupera el sentido de la lucha por la democracia, partiendo del postulado de guerra justa. Las experiencias de Cuba y Chile alertan, también, a sus organizaciones populares de las dificultades y acciones de desestabilización a que serían sometidas y a las que deberán dar respuesta.

El principio de definición sobre el cual se asentaría el triunfo revolucionario dejó claros los límites sobre los cuales se desarrollará el proyecto sandinista. «La revolución sandinista nace como una revolución democrática, popular y antiimperialista, y el gobierno de reconstrucción como un gobierno de unidad nacional donde participan todos los sectores sociales. Por primera vez en la historia una revolución de carácter radical levanta los principios de una economía mixta en el régimen de propiedad y el pluralismo político. Inmediatamente después del triunfo, la revolución explicita sus objetivos: democracia, desarrollo y transformación, bienestar social, soberanía y autodeterminación. Desde entonces el régimen sandinista mantiene como rasgo de su funcionamiento político cuatro premisas fundamentales: pluralismo político, economía mixta, defensa soberana y no alineación y participación y movilización popular»⁴³.

El surgimiento de una nueva forma de construcción del proyecto político de liberación, cuya referencia se obtiene en relación a «un sujeto social y político que hace a una voluntad colectiva que sintetiza a la masa y que tiene a las clases como su principal determinante, siendo el pueblo actor», es la diferencia más destacada con los procesos anteriores⁴⁴. La hegemonía del pueblo es el factor que posibilita el surgimiento del movimiento popular. Su acción conjuga la lucha por la liberación nacional y el socialismo. «La lucha nacional, la lucha democrática y popular, sin la lucha por el socialismo, son parte importante de un conjunto de importantes batallas intermedias, como las que se dan por los salarios y las condiciones de trabajo (con demandas puramente económicas) o las de minorías étnicas superexplotadas y las de campesinos sin tierra, con demandas y formulaciones sólo anticolonialistas, antirracistas y agraristas. A los peligros de no dar estas luchas se añaden, sin embargo, las de quedarse sólo en ellas y en las ideologías nacionalistas, populistas, agraristas..., que las hegemonizan, que unen lo diverso. (...) Los partidos y organizaciones socialistas que privilegian la lucha contra la burguesía local difícilmente logran participar de la hegemonización de las fuerzas si no se plantean también la cuestión nacional, la liberación nacional. Esta y la lucha contra el tirano y contra las más distintas formas de autoritarismo constituyen los principales móviles de unificación de una sociedad altamente heterogénea, que vive las humillaciones del colonialismo y de las dictaduras en forma permanente. El

trabajador y el pueblo sometidos a una explotación diferencial, y divididos en las más distintas categorías sociales y políticas, en tribus y minorías, en ciudadanos de colores, en trabajadores asalariados y endeudados, en sindicalizados y no sindicalizados, en de planta, en eventuales, en temporaleros, en cuijes, encuentra un punto de unión en la lucha contra el imperio y en la lucha contra el tirano»⁴⁵.

El desarrollo de una política, así concebida, donde participen legítimamente todos los sectores sociales y quienes lucharon contra la dictadura somocista, marcó el comienzo de una época. Sectores de la burguesía, empresarios, intelectuales y profesionales se unen al Frente Patriótico Nacional, expresión global del movimiento popular. La Junta de Reconstrucción Nacional es el resultado de esta opción ideológico-político: Violeta Chamorro, Arturo Cruz o Alfonso Robelo serán algunos de sus integrantes. El Consejo de Estado, organismo de dirección colectiva de todas las fuerzas antisomocistas representó el principio democrático y popular sobre el que se asienta el sandinismo; coincidente con «un régimen económico que asegura a los hombres y mujeres sus necesidades básicas de alimento, trabajo, vivienda, educación y salud; donde se cuenta con la participación popular organizada para la realización de planes económicos, políticos y sociales, donde existe la voluntad política y los mecanismos para efectivizar y garantizar los derechos políticos, sociales y culturales de las mayorías y donde el poder está detentado por las masas trabajadoras, cuyo sello es netamente popular»⁴⁶.

El triunfo del sandinismo hace sentir su influencia en movimientos políticos-sociales del conjunto latinoamericano. Organizaciones como el PTB en Brasil, Izquierda Unida en Perú o frentes cívico-militares: FMLE-FDR en El Salvador y URNG en Guatemala. Asimismo, la hegemonía del pueblo constituye un factor de unidad en el proyecto de liberación, cuyo resultado es el aumento de participación política de la sociedad civil: son los movimientos de clase, de género, culturales, étnicos o religiosos, reorientados en su lucha nacional y democrática. No siendo, a nuestro juicio, una novedad su presencia inicial, sino su diferente forma de organización lo que otorga otras características a sus acciones. Movimientos sociales que se redefinen en el interior de sociedades altamente autoritarias, excluyentes y represivas, cuya crisis de legitimidad conlleva una crisis de representación de lo político. Es de esta crisis

de donde surge su fuerza en América Latina, y no de una supuesta «originalidad». Para ejemplarizar podemos tomar la nueva cristiandad: «La crisis general de la sociedad latinoamericana apunta a un nuevo tipo de sociedad naciente. Dentro de la misma iglesia hay ahora grupos, particularmente aquellos identificados como la “iglesia popular”, que rechazan cualquier tipo de fórmula de cristiandad. Lo que está en crisis en otras palabras, no es la iglesia como tal, sino un modelo particular de las relaciones Iglesia-Estado. Si el movimiento general del pueblo conduce a un nuevo tipo de sociedad, habrá un nuevo tipo de relaciones Iglesia-Estado, que avance más allá de cualquier tipo de cristiandad. Si por otra parte prevalecen los regímenes militares autoritarios, el resultado será una nueva “cristiandad militar-eclesíástica”»⁴⁷.

5. Los argumentos para nuevas invasiones y mejores contrarrevoluciones. De Panamá al liberalismo social



Si el triunfo de la revolución sandinista tuvo lugar en un contexto regional, donde la acción exterior de los Estados Unidos encuentra en la administración del gobierno demócrata de James Carter, una política de Derechos Humanos que se desmarca del apoyo tradicional a las dictaduras, su desarrollo se hace en condiciones totalmente desfavorables tras el triunfo del neoconservadurismo de Ronald Reagan.

Para Ronald Reagan y sus «tanques de pensamiento», la contención activa, la disuasión por el uso de la fuerza y el convencimiento de que se estaba en presencia de una guerra prolongada contra el comunismo marcan los ejes sobre los cuales se construirá su estrategia para América Latina. Los documentos de Santa Fe I y II así lo atestiguan: «En contraste con las políticas simplistas norteamericanas (crítica a la política de J. Carter) la Unión Soviética ha empleado tácticas sofisticadas tanto para incrementar las conexiones del comunismo internacional en América Latina, como para reducir la presencia de los Estados Unidos en la región..., fruto de ello es que los Estados Unidos se enfrentan a una Unión Soviética

ca vigorosamente instalada en el Caribe y a una Centroamérica posiblemente marxista»⁴⁸.

Si en el proceso de desestabilización en Chile se destacará el carácter clandestino de su puesta en práctica «que incluyó la manipulación y desinformación de otras ramas del gobierno norteamericano, y cuya planificación recayó en un grupo especial y ultrasecreto del Consejo de Seguridad Nacional, el Comité Cuarenta, a cuya cabeza se encontraba... Henry Kissinger. Hoy bajo el gobierno de Reagan, el término se sustituye por el de reversión, deja de ser una política encubierta, se asume como política de Estado avalada por el propio Congreso norteamericano, e incluye la construcción de insurgencias contrarrevolucionarias»⁴⁹. América Latina se transforma en esta visión del conflicto en parte de la política de seguridad nacional de los Estados Unidos y por tanto integra los planes de defensa del Pentágono y el Departamento de Estado. Las guerras de baja intensidad, son su respuesta a la lucha por la liberación nacional, la democracia y el antiimperialismo. La puesta en marcha de este planteamiento comienza con la invasión a la Isla de Granada y continúa con el acoso sistemático al gobierno sandinista. La creación de la «contra» y el apoyo militar y económico a los gobiernos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, formando una piña para aislar a Nicaragua del resto de la región, tiene como fin lograr su destrucción.

A la lucha contrainsurgente y como parte de la guerra de baja intensidad se unirán la estrategia para revertir procesos, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, cuestión que precipita la denominación de narcoguerrilla y fuerza el control militar de los ejércitos de la región por las fuerzas armadas estadounidenses. «El problema de la guerra de baja intensidad requiere que confrontemos una multitud de cuestiones políticas, militares, intelectuales y morales. Se trata de un conjunto de retos nuevos y no convencionales más complicados para nuestra política. Es el azote del terrorismo en el mundo; la lucha en Nicaragua entre la resistencia democrática y el régimen comunista, las insurgencias contra la intervención soviética y cubana en Angola y Etiopía..., nuestro rescate de Granada...»⁵⁰.

Así comienzan los embates de la administración Reagan. El minado de puerto Corinto, el apoyo interno a los grupos antisandinistas, el boicot económico y la descapitalización, buscan favorecer las condiciones para disminuir las posibilidades de asentamiento de la revolución san-

dinista en un corto plazo. Política que se intensifica a partir de 1984, tras el triunfo del FSLN en las primeras elecciones democráticas y constitucionales de la historia de Nicaragua. La caída de las exportaciones, las dificultades para negociar la deuda exterior, el aumento de la guerra, una inflación del orden del 27.000 %, el mercado negro, la fuga de recursos humanos y la pérdida de confianza, culminan con el éxito de esta estrategia: la derrota electoral del FSLN en febrero de 1990.

La invasión a Panamá, la vía electoral a la contrarrevolución, el fracaso de los llamados a la insurrección final en El Salvador y el golpe de Estado que derroca al presidente Bertrand Aristide en Haití han supuesto el surgimiento de un nuevo argumento que, sumado a los provenientes de las experiencias chilena y cubana, cierran el ciclo de las claudicaciones. Primero fue la renuncia a la revolución, luego le siguió el socialismo y ahora le toca el turno al antiimperialismo. Renuncias que dan como resultado el desarrollo y surgimiento de la «nueva» izquierda en América Latina⁵¹. Nueva porque se declara impotente para romper con el patrón neo-liberal, haciendo explícita su renuncia a luchar contra el imperialismo, el colonialismo interno, la desigualdad y la dependencia cultural, política, económica, tecnológica y militar.

Esta situación de abandono de principios y valores de identidad y lucha antiimperialista termina por recomponer el pacto de gobernabilidad desde opciones reaccionarias: «La estructura del argumento es admirablemente sencilla, mientras la pretensión expresada es bastante extrema. No sólo se afirma que un movimiento o una política errará su meta o provocará costos inesperados: más bien, según este argumento, la tentativa de empujar a la sociedad en determinada dirección resultará, en efecto, un movimiento, pero en dirección opuesta. Sencillo, sugestivo y devastador, el argumento ha resultado popular entre generaciones de "reaccionarios" a la vez que bastante efectivo entre el público en general. En los debates actuales se le evoca a menudo como efecto contraintuitivo, contraproducente o más pertinentemente, perverso de alguna política pública "progresista" o "bien intencionada". Las tentativas de alcanzar la libertad harán que la sociedad se hunda en la esclavitud, la búsqueda de la democracia producirá oligarquía y tiranía y los programas de seguridad social crearán más, y no menos, pobreza. Todo es contraproducente»⁵².

La ética y los principios que implican un control social y participativo de lo que el poder hace,

terminan siendo recuerdos de una era de instrumentalización ideológica del proceso de toma de decisiones. A partir de ahora la pobreza y la exclusión social dejan de ser responsabilidad de los gobiernos. El resurgir del liberalismo agresivo, el capitalismo salvaje, la desarticulación de la actividad pública del Estado, transformándolo en agente represivo y policial, son algunos factores que explican la deslegitimación social y política de los actuales sistemas electorales. Sistemas que amparados bajo el manto representativo de sus formas no dan pie a que la democracia pueda formar parte del proceso de toma de decisiones.

Si el pensamiento político-social de la década de los años sesenta demostró el equívoco de pensar el subdesarrollo como etapa del capitalismo, el actual proceso de globalización viene a dejar en claro que capitalismo y desarrollo no son sinónimos, al igual que no lo son democracia y capitalismo. Las teorías duales que fundamentaron la desigualdad y la pobreza en la falta de desarrollo político, social y económico, hoy son abandonadas para recuperarlas en la retórica de la futilidad: sólo dualizando las sociedades, desintegrando lo colectivo, será posible que se camine hacia un mundo feliz de orden y progreso. El desarrollo deja de formar parte del horizonte histórico, se trata de lograr la modernidad y ello requiere pobres y excluidos. La riqueza de una sociedad pasa a medirse, ahora, por el grado de bienes de consumo disponibles para el disfrute individual. Los elevados niveles de concentración del ingreso y la expulsión de grandes mayorías sociales de los beneficios del «libre mercado» son expresión justa y equitativa de una buena distribución de la renta en función de los esfuerzos individuales por ser competitivo, moderno y emprendedor. Todos tenemos las mismas posibilidades de ser ricos, el que no quiere es porque no tiene iniciativa. Hoy se trata de «enseñar a pescar y no dar pescado». Lo que no señala este dicho es que después de «enseñar a pescar» se advierte a los futuros pescadores modernizados tecnológicamente que en el río hay un solo pez y que el agua está contaminada.

Igualdad de oportunidades para ser ricos. Si no se logra pescar y se sigue teniendo iniciativa siempre queda la posibilidad, en una economía libre de mercado, de hipotecar la caña para modernizarse, reconvertirse en recurso humano flexible, barato y de uso ilimitado, pero sin dejar de ser un ciudadano, dueño de su propio destino y empresario de sí mismo. Argumentación que hoy comparten, indistintamente socialdemócratas, libera-

les, conservadores, democratacristianos, intelectuales post-modernos y críticos-críticos, hacedores del sentido común del orden reaccionario⁵³.

6. México: la lucha democrática por la construcción de un Estado multiétnico



La violencia estructural, generadora del orden social sobre el cual se asienta la dominación política de las clases dominantes en América Latina, tiene su máxima expresión en la exclusión de los pueblos indios. No se trata de una marginación social, sino de una concepción de democracia estatal constituida a partir de las formas de dominación monoétnicas que atraviesan las sociedades latinoamericanas donde la presencia de la población indígena es mayoritaria. Es la falta de democracia lo que mantiene vigente un sistema político basado, también, en la violencia étnico-racial. La represión hacia formas de participación, mediación y negociación de los pueblos indios pone en evidencia la negativa a producir una nueva hegemonía multiétnica. El Estado produce estatalmente la nación. Esta ha sido la constante política en la conformación de los Estados Nación en América Latina.

Si hasta la experiencia nicaragüense la lucha por la democracia puede identificarse con una búsqueda por abrir espacios articulados sobre la hegemonía del pueblo y las clases subalternas, interpretando el problema étnico como parte de un sistema de injusticia social superable en el marco de un Estado monoétnico, la experiencia de Chiapas modifica este criterio obligando a redefinir la propia forma de democracia y estado. La nueva propuesta de democracia asume un contenido étnico que debe contener el reconocimiento de las diferencias culturales presentes en las sociedades nacionales. Sociedades de conquistados y conquistadores donde la represión no es sólo social y económica, sino cultural y étnico-racial.

El levantamiento insurreccional del primero de enero de 1994 en el Estado de Chiapas, México, da a conocer un nuevo tipo de enfrentamiento que modifica las características del conflicto social y de la lucha por construir un poder democrático, no sólo en México sino en el conjunto de países latinoamericanos.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hace un llamado a la sociedad civil y política mexicana que sobrepasa el mero efecto sorpresa de la acción insurreccional. Busca discutir sobre los contenidos que debe de asumir un proyecto democrático que ha olvidado o marginado a las comunidades étnicas en su elaboración. Así, el punto de inflexión lo constituye el hecho significativo de proponer un proyecto democrático que une el derecho de autonomía regional y de autodeterminación de los pueblos indios con la necesaria redefinición de la forma de Estado. Es un proyecto de articulación multiétnica del Estado lo que se propone como auténtica expresión de poder democrático.

No se trata, como se ha querido presentar, de una visión milenarista. No ha sido Quetzalcoatl o el restablecimiento de la tierra de Xibalbá lo que motivó el alzamiento armado, ha sido la violencia estructural, la miseria y la exclusión lo que ha llevado a ejercitar la contraviolencia. El rescate de un líder campesino de la revolución mexicana como inspirador de la lucha, hunde sus raíces en la historia del agrarismo mexicano. Porque la «biografía de Emiliano Zapata empieza muchos siglos antes de que él naciera, en los estratos más profundos de la historia de México que es, en gran parte, la historia del problema agrario. Sus raíces ascienden ligadas a este problema desde una profundidad en el tiempo que va más allá de los treinta años de don Porfirio, de todos los del México independiente, y que ni siquiera arranca, como quisieran otros, de la gruesa capa de trescientos años de dominación española. Tampoco podría explicarse sólo por la conquista del blanco sobre el indio, sino por una antigua y dura injusticia que se ha abatido secularmente sobre las tierras de nuestra patria. Nunca ha habido un hombre más íntimamente ligado a la historia de su pueblo que Emiliano Zapata. Y cuando decimos pueblo, nos referimos al mismo grupo humano de que procede, que al lugar geográfico en que brotó. Este pueblo puede ejemplarizar admirablemente la historia del agrarismo... El no encendió una revolución. La revolución lo arrastró a él. Dentro de la paz y la ley suplicó; pidió y reclamó lo que era de su pueblo y no se le hizo justicia. No tenía otro camino que ir a pelear con las armas lo que se le negaba con el derecho»⁵⁴.

Es este reencuentro con las mismas demandas que motivaron el levantamiento contra el porfiriatto, Tierra y Libertad, lo que está presente en el actual movimiento insurreccional zapatista. Lucha

por la tierra y por los derechos étnicos de quienes sufren la explotación en su doble condición de ser pueblos indios y campesinos pobres. Aquí, estriba la peculiaridad del EZLN; el haber unido a su reivindicación de democracia multiétnica una obligada transformación política del actual Estado de hegemonía monoétnica. De esta manera la lucha democrática adquiere un sentido que obliga a realizar un cambio en el actual Estado mexicano de hegemonía monoétnica. Hegemonía que ha obstaculizado la posibilidad de una salida democrática a los problemas planteados por los pueblos indios. Problemas agravados con el impulso al proyecto de liberalismo social dado por el gobierno del presidente Salinas de Gortari.

Así, mucho antes de producirse la insurrección del EZLN, las transformaciones a que ha sido sometido el Estado mexicano con el fin de adecuar su estructura a las políticas del liberalismo social tendían inexorablemente hacia una agudización del conflicto social cuyo resultado fue el levantamiento armado del 1 de enero de 1994. En este sentido los condicionantes para tal explosión tienen su origen, en parte, en las reformas jurídicas planteadas por el Presidente a los artículos 4 y 27 de la Constitución, entre los años 1991 y 1992 respectivamente.

«La sociedad nacional se encuentra en una importante coyuntura jurídico-política, de posibles consecuencias trascendentales para el futuro próximo de millones de mexicanos: la ocasión de reglamentar el primer párrafo del art. 4.º de nuestra constitución política. Como se sabe, este párrafo —recién adicionado en 1991 por iniciativa del poder ejecutivo— se refiere a los derechos culturales de la población indígena del país. En esta reforma, la formulación que recibieron tales derechos planteaba por sí sola un conjunto de dificultades y restricciones muy severas a la aspiración de desplegar en la ley, con la amplitud que requiere la difícil situación de las etnias, las demandas indispensables de los pueblos indios. Así las cosas, evidentemente era iluso esperar que el reconocimiento de la “composición pluricultural” de la nación se manifestara en una fundación multiétnica del Estado... las modificaciones que se hicieron al artículo 27 constitucional reducen aún más los márgenes sustantivos para reconocer legalmente una reivindicación histórica de los pueblos indios: el control colectivo e interno de sus recursos, en especial de las tierras. Asimismo, la aplicación de tales cambios disminuye las posibilidades de que las comunidades indígenas puedan protegerse de

la permanente posesión circundante y del asedio externo sobre sus recursos y modos de vida. La nueva legislación agraria que de ello resulta, liberaliza los controles del grupo y crea los mecanismos jurídicos para que, bajo determinadas condiciones y “libremente”, los ejidatarios (y eventualmente los comuneros) puedan ceder los derechos de usufructo sobre sus recursos —en conjunto o individualmente—, parcelar sus tierras, ponerlas en manos de terceros para su explotación e incluso enajenarlas. Todo esto por medios bastante expeditivos»⁵⁵.

Son las reformas políticas emprendidas por los gobiernos de De la Madrid y Salinas de Gortari los causantes del proceso de deslegitimación del sistema político y por ende de las formas de articulación del conflicto social. La exclusión y marginación de las grandes mayorías nacionales de los procesos de toma de decisiones culminan en una desnacionalización de la política que anula los factores históricos de cohesión social nacidos de la revolución de 1910. La reinterpretación de la historia cuyo objetivo está en eliminar el contenido antiimperialista y nacional del proyecto político ha tenido como contrapartida el desarrollo de una lucha por recuperar y mantener los aspectos más destacados del proyecto democrático de la revolución. Máxime cuando a lo anterior se une un problema de legitimidad surgido tras las elecciones del 21 de agosto de 1988, donde se acusó de fraude electoral al Partido de la Revolución Institucional (PRI) en tanto que evitó el triunfo del candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas. Hecho que se explicita en el comunicado público realizado por el EZLN de fecha 6 de enero de 1994. «Las graves condiciones de pobreza de nuestros compatriotas tienen una causa común: la falta de libertad y democracia. Nosotros consideramos que el respeto auténtico a las libertades y a la voluntad democrática del pueblo son requisitos indispensables para el mejoramiento de nuestras condiciones económicas y sociales de los desposeídos de nuestro país. Por esta razón enarbolamos la bandera del mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo mexicano, presentamos la demanda de libertad y democracia políticas, para lo cual pedimos la renuncia del gobierno ilegítimo de Carlos Salinas de Gortari y la formación de un gobierno de transición democrática, el cual garantice elecciones limpias en todo el país y en todos los niveles de gobierno»⁵⁶.

La naturaleza del problema planteado es, pues, de legitimidad del Estado y de falta de credibilidad en la «pureza» de los procesos electorales.

Des crédito que aumenta en tanto que hoy existe una mayor necesidad de control de los procesos electorales tras la firma del Tratado de Libre Comercio. Tratado que no puede ser cuestionado obligando a México a mantener las políticas de desnacionalización emprendidas por Salinas de Gortari. Las cartas se entienden así marcadas por un continuismo del presidencialismo priista y por su imposibilidad de abrir espacios democráticos que supongan un cuestionamiento del TLC o al menos una renegociación más acorde con los intereses generales del pueblo mexicano y no sólo de los grandes grupos transnacionalizados y administradores de las empresas norteamericanas con sede en México. De esta manera no es extraño que el mismo día que entraba en vigor el TLC se produjese la insurrección en el Estado de Chiapas.

Asimismo el hecho de entrar en un año electoral de sucesión presidencial volvía a poner en entredicho la validez y legitimidad del sistema político para dar salida a la crisis institucional que se arrastraba desde 1988. Por este motivo en su comunicado de fecha 11 de enero de 1994, el EZLN, declararía:

«El Ejército Zapatista de Liberación Nacional no se levantó en armas para apoyar a uno o varios candidatos a la Presidencia de la República. El EZLN no busca que gane un partido o gane otro, el EZLN busca que haya justicia, que haya libertad, y que haya democracia para que el pueblo elija a quien mejor le acomode su entender y que esta voluntad, cualquiera que sea, reciba respeto y entendimiento de los mexicanos todos y de otros pueblos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional pide que el gobierno, de cualquier partido que sea, sea un gobierno legítimo, resultado de una elección verdaderamente libre y democrática y resuelva las necesidades más apremiantes de nuestro pueblo mexicano, especialmente de nosotros los indígenas»⁵⁷.

Es esta peculiaridad lo que marca la diferencia con el resto de insurrecciones acaecidas en América Latina. Ante la eminencia de un nuevo posible fraude y de una mayor pérdida de identidad histórica de la Revolución mexicana de 1910 y que no fue sólo el grito de «sufragio efectivo y no reelección», sino también reivindicación agrarista de «tierra y libertad», se produce el alzamiento zapatista. Alzamiento que incorpora la necesidad de mantenimiento comunal de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas contra el poder de los ganaderos y latifundistas que continuamen-

te matan y ejercen la represión impunemente con el consentimiento del gobierno. Efectivamente, la acción armada del EZLN trata de recuperar la democracia como parte constitutiva de la propia revolución mexicana.

«HOY DECIMOS ¡BASTA! Somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de setenta años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias, son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas, son los mismos que se opusieron a la expropiación petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo»⁵⁸.

No es de extrañar por lo tanto que el ejército nacido en Chiapas se reivindique del zapatismo para afrontar las luchas por la democracia y la construcción de un Estado multiétnico. El EZLN hace un llamado al conjunto de la población para evitar la desnacionalización e impedir un nuevo fraude electoral, reivindicando el desarrollo de elecciones como un mecanismo de hacer política y de promover un cambio social democrático. Para tal fin considera indispensable ejercer una presión cívica y ahora militar para lograr dicho objetivo.

Por primera vez, una acción armada tiene como objetivo convocar a las organizaciones civiles y democráticas a vigilar un proceso electoral como forma de compromiso vital con el nuevo proyecto democrático. Ello considerado como un factor no instrumental o meramente propagandístico. El EZLN «Convoca a aquellos que luchan o quieren luchar por el cambio democrático. Quienes no quieren el cambio democrático NO ESTAN CONVOCADOS. Convoca a quienes estén de acuerdo en insistir en el cambio democrático pacífico. Quienes piensan que sólo por la lucha armada se consigue el cambio democrático NO ESTAN CONVOCADOS. Convoca a quienes están de acuerdo en aprobar que ese cambio de-

mocrático se dé, también por la vía electoral. Quienes no estén de acuerdo en probar la vía electoral NO ESTAN CONVOCADOS»⁵⁹.

A pesar de estas declaraciones las descalificaciones que se han realizado hacia el EZLN han tendido a destacar el carácter antidemocrático del uso de la violencia como forma de lucha política⁶⁰, diferenciado las justas reivindicaciones de los métodos empleados. Sin embargo, nadie se ha planteado la violencia estructural que se lleva ejerciendo durante ya varios siglos sobre las poblaciones y pueblos indios conquistados. El intento de separar forma y contenido no tiene más objetivo que deslegitimar la lucha por la democracia y la defensa de sus derechos colectivos sobre su territorio.

Parece ser que los detractores olvidan o minimizan los efectos que tiene el uso de la fuerza a la hora de mantener los privilegios y las desigualdades sociales que con tanto «honor» defienden en nombre de la civilización y las libertades individuales de mercado. Resulta grotesco que después de tanto tiempo de injusticias, violencia étnica, caciquil, cultural y racial contra los pueblos indios se les achaque a éstos el romper el pacto de desigualdad natural. La violencia natural no es violencia, es legítima defensa y por ello no tienen cabida las reivindicaciones democráticas que por la fuerza pretenden cambiar el orden establecido y legalmente vigente.

El levantamiento de Chiapas no es resultado sólo de la pobreza o de acciones regionales contra poderes caciquiles. No es un México atrasado el que levanta la bandera de la democracia y el Estado multiétnico, sino por el contrario aquél que ve en la defensa de sus derechos y en la unidad de los pueblos explotados y dominados, en las organizaciones civiles populares, en los movimientos sociales y políticos que creen en la democracia los que toman la bandera de su defensa y lucha. Sea éste el hecho por excelencia que está detrás del debate. Aceptar que la democracia implica y supone un reconocimiento previo de una cultura dialógica, de una participación y de una negociación entre sujetos y fuerzas políticas y sociales contrapuestas. Fuerzas capaces de dar legitimidad y mantener un orden democrático. Quizás el carácter violento de la reivindicación democrática del EZLN esté demostrando el autoritarismo, la represión y la negación de la democracia por quienes han disfrutado de la injusticia social y de los beneficios que supone formar parte de las élites dominantes, tanto intelectual, como política y económicamente.

La insurrección del EZLN en Chiapas no es simple expresión de una lucha contra la pobreza, sino contra los orígenes sociales de la misma. Pobreza no sólo material también ética y moral. Son en este sentido la desigualdad, la injusticia social, la explotación material y la exclusión política, los factores a erradicar, y los que se constituyen de inmediato como parte de la nueva propuesta democrática. Propuesta lanzada al conjunto de la sociedad mexicana y que ha culminado con la celebración de la Convención Nacional Democrática el 6 de agosto de 1994.

La insurgencia civil como una forma de defender el proceso democrático, proclamada por la CEOIC, es ya una nueva manera de pensar la democracia. Es esta propuesta la que nos obliga a realizar un gran esfuerzo por comprender y reconocer que la democracia sólo se puede construir en América Latina cuando ésta se reivindica de manera radical y como consecuencia de un poder realmente existente, donde el colonialismo interno sigue siendo, a pesar de los dos siglos de independencia política, la forma más completa del ejercicio del poder de «nuestras» clases dominantes.

Se quiera o no, la acción emprendida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, viene a recordar que la construcción de la democracia social, política, económica y cultural es también étnica. La utopía democrática está hoy más vigente que nunca. Su defensa y articulación han quedado definitivamente en manos del pueblo. El futuro no está en manos de las minorías dominantes del continente. Aún no han ganado su control. La democracia sigue siendo una opción presente.

NOTAS

¹ GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo: *Estudios de técnica social*. México, UNAM, 1958, pág. 134.

² CARMAGNANI, Marcelo: *La ilusión de la oligarquía*. Barcelona, Crítica, Grigalbo, 1987.

³ ARÉVALO MARTÍNEZ, Rafael: *Ecce Pericles*. S. José, Costa Rica, EDUCA, 1983.

⁴ GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo: *América Latina en la década de los años treinta*. México, UNAM, 1978.

⁵ LOWY, Michael: *El marxismo en América Latina*. México, ERA, 1982.

⁶ VALFENILLA LANZ, Laureano: *Cerarismo democrático*. Caracas, Monte Avila, 1990.

⁷ SANI FERNÁNDEZ, Jonh: «Los fundamentos de la derechización en los Estados Unidos», en *Tiempos Conservadores, América Latina en la derechización de Occidente*. Quito, El Conejo, 1987, pág. 72.

⁸ SIEISER, Gregorio, y ROJMAN, Marcos: «Militares y política en América Latina», *Revista Fonseca*, Universidad de Salamanca, núm. 4, 1990, pág. 41-59.

⁹ COMBES, Joseph: *El poder militar en América Latina*. Salamanca, Sígueme, 1978.

¹⁰ Estas fueron las leyes de defensa de la democracia que surgirán por todo el continente a partir de la década de los años cincuenta.

¹¹ CONNELL-SMITH, Gordon: *El sistema interamericano*. México, FCE, 1971.

¹² En este sentido cabe resaltar el surgimiento de la Legión Caribe que se formará para luchar contra las dictaduras de Trujillo y Somoza con un sentido más propagandístico que efectivo y la ideología de sus más destacados miembros era esencialmente anticomunista. Entre ellos destaca José Figueres, Juan Arévalo, Raúl Haya de la Torre, Rómulo Betancourt y Rosendo Argüello.

¹³ PÉREZ CHARLES, Gerard: *Génesis y desarrollo de la revolución cubana*. México, Siglo XXI, 1979.

¹⁴ CASTRO, Fidel: «La historia me absolverá», en *Cinco Documentos*. Cuba, Instituto cubano del libro, 1971, pág. 41.

¹⁵ GULVARA, Ernesto: «Guerra de guerrillas», Madrid, Fundamentos, 1978, vol. I. Obras escogidas, pág. 31.

¹⁶ GULVARA, Ernesto: «El hombre y el socialismo en Cuba», *op. cit.*, pág. 240, vol. II.

¹⁷ GODO, Julio: *Historia del movimiento obrero latinoamericano*. México, Nueva Imagen-Nueva Sociedad, 1980.

¹⁸ BAMBIRRA, Vania: *Diez años de insurrección en América Latina*. Santiago de Chile, PLA, 1972.

¹⁹ Para el debate de modos de producción, se pueden consultar como autores más destacados de la polémica: LAZAR, Ernesto: «Feudalismo y capitalismo en América Latina»; VIALI, Luis: «El carácter capitalista de la conquista de América»; ASSADOURIAN, Carlos: «Modos de producción, capitalismo y subdesarrollo en América Latina». Una selección se encuentra en el texto: *Modos de Producción en América Latina*. México, Siglo XXI. *Cuadernos de Pasado y Presente*, núm. 40.

²⁰ AA.VV.: *Modos de producción en América Latina*. México, Cultura Popular, 1978.

²¹ DEBRAY, Régis: *La crítica a las armas*. México, Siglo XXI, 1976.

²² Véase el libro: *MIR, Historia de su lucha*. Madrid, ZYX, 1977.

²³ GILLI, Adolfo: *Por la senda de la guerrilla*, 2 vol. México, Nueva Imagen, 1986.

²⁴ IANNI, Octavio: *Violencia y cultura del imperialismo*. México, Siglo XXI, 1976.

²⁵ SANK FERNÁNDEZ, Jonh: *La pax americana*. Buenos Aires, Amorrortu, 1975.

²⁶ ALLENDE, Salvador: «La vía chilena al socialismo», en *Obras Escogidas*. Santiago de Chile, Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar-Fundación Presidente Allende, 1992, pág. 324.

²⁷ Una concepción latinoamericana que buscará romper la concepción anticomunista de la doctrina de la seguridad nacional se encuentra en el libro del General: *Mercado Jarrín, Edgardo: Seguridad, política, estrategia*. Lima, SCHAPIRI, 1975.

²⁸ ALLENDE, Salvador: *Op. cit.*, pág. 330.

²⁹ ALLENDE, Salvador: «Tercer mensaje al congreso pleno», *op. cit.*, pág. 509.

³⁰ GARCÉS, Joan: *El estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende*. España, Siglo XXI, 1974.

- ³¹ *Comunistas, socialistas y católicos*. Barcelona, LAIA, 1978. «Introducción», pág. 8.
- ³² CARRILLO, Santiago: *Eurocomunismo y estado*. Barcelona, Crítica, 1977, pág. 133.
- ³³ ROSSANDA, Rossana: «La izquierda europea y la experiencia chilena», en *Movimiento obrero y acción política*. México, ERA, 1975, pág. 50.
- ³⁴ CLAUDIN, Fernando: «Superación del Estado burgués: el viejo escenario», en *Teoría socialista del Estado*. Escuela de Verano del PSOE, 1977, pág. 142.
- ³⁵ ZEMELMAN, Hugo: *Estado, poder y lucha política*. México, Villacaña, Casa Chile, 1986.
- ³⁶ SELSER, Gregorio: *Los días del Presidente Allende*. Archivo Salvador Allende, núm. 14. México, UAM, 1991.
- ³⁷ ALLENDE, Salvador: *Op. cit.*, pág. 548.
- ³⁸ O'DONNELL, Guillermo: «Las transformaciones del estado burocrático-autoritario», en *Revista Mexicana de Sociología*, México, UNAM, 1977.
- ³⁹ LECHNER, Norbert: «Modernización y modernidad: la búsqueda de la ciudadanía», en *Modernización económica, democracia social y democracia política*. México, El Colegio de México, 1993.
- ⁴⁰ GARRETON, Manuel Antonio: *El proceso político chileno*. Santiago de Chile, FLACSO, 1983, pág. 60.
- ⁴¹ MOULIAN, Tomás: *Democracia y socialismo en Chile*. Santiago de Chile, FLACSO, pág. 165.
- ⁴² CUEVA, Agustín: *Las democracias restringidas de América Latina*. Quito, Planeta, 1988; y WEFFORI, Francisco: *¿Cuál democracia?* San José, FLACSO, 1993.
- ⁴³ NÚÑEZ SOTO, Orlando: *Transición y lucha de clases en Nicaragua 1979-1986*. México, Siglo XXI, pág. 85.
- ⁴⁴ CAMACHO, Daniel, y MENCHIVAR, Rafael: «Los movimientos populares en Centroamérica», en *América Latina: entre los mitos y la utopía*. ROITMAN, Marcos, y CASIRO, Carlos (Coord.). Madrid, Complutense, 1990.
- ⁴⁵ GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo: *La hegemonía del pueblo y la lucha en Centroamérica*. San José, EDUCA, 1984, pág. 22.
- ⁴⁶ NÚÑEZ, Carlos: *Discursos*. Edt. Vanguardia. Managua, 1987. Véase también el excelente trabajo de VILAS, Carlos: *Perfiles de la revolución sandinista*. Premio ensayo Casa de las Américas. La Habana-Cuba, 1984.
- ⁴⁷ BERRYMAN, Phillip: *Teología de la liberación*. México, Siglo XXI, 1989, pág. 124.
- ⁴⁸ SELSER, Gregorio: *El documento de Santa Fe. Reagan y los derechos humanos*. México, Alpa-Corral, 1988.
- ⁴⁹ BERMÚDEZ, Lilia: *Guerra de baja intensidad. Reagan contra centroamérica*. México, Siglo XXI, 1987, pág. 161.
- ⁵⁰ BERMÚDEZ, Lilia: *Op. cit.*, discurso de George Schultz, pág. 85.
- ⁵¹ CASTANEDA, Jorge: *La utopía desarmada*. México, Joaquín Mortiz, 1993.
- ⁵² HIRSCHMAN, Albert: *Retóricas de la intransigencia*. México, FCF, 1991, págs. 21-22.
- ⁵³ DE SOTO, Hernando, y SCHMIDHELYN, Stephan: *Las nuevas reglas del juego*. Bogotá, Oveja Negra, 1991.
- ⁵⁴ SOTELO INCLÁN, Jesús: *Raíz y razón de Zapata*. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991, pág. 40.
- ⁵⁵ DÍAZ POLANCO, Héctor: «Autonomía, territorialidad y comunidad indígena. Perspectivas del Estado Multiétnico en México». Ponencia presentada al curso de verano de la Universidad Complutense. Democracia y estado multiétnico en América Latina. Agosto 1992. Coord. González Casanova, Pablo y Roitman, Marcos.
- ⁵⁶ «Aquí estamos nosotros, los muertos de siempre, murieron otra vez, pero ahora para vivir.» Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario —indígena— Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México.
- ⁵⁷ «Nuestra voz empezó a caminar desde siglos y no se apagará nunca más.» Comunicado del Comité Clandestino revolucionario Indígena. Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México.
- ⁵⁸ «Proclama de La Selva Lacandona. Hoy decimos ¡BASTA! al pueblo mexicano. Hermanos mexicanos.»
- ⁵⁹ Carta abierta del Subcomandante Marcos a la Primera Convención Estatal de la Asamblea del pueblo Chiapaneco. Reproducida por el periódico *La Jornada*, México, 3 de julio de 1994, pág. 3.
- ⁶⁰ No es de extrañar que muchas de las recopilaciones que se han realizado en México han dejado de lado aquellas que más proclives se muestran a presentar el problema como una nueva forma de lucha democrática. En este sentido puede verse el libro compilado por: TREJO DEL ARBRE, Raúl. México, Edt. Diana, 1994. Para un seguimiento más completo puede consultarse el periódico *La Jornada*. Diario que sí ha captado las diferencias de análisis, publicando y debatiendo abiertamente todas las concepciones teóricas que están presentes.